



**Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas**

**2020-2021**

**PROYECTO FIN DE MÁSTER**

**“Responsabilidad de los administradores sociales y normativa Covid-19”**

**Autor:** Jose Manuel Alcayde Natera

**Director:** Don José Luis Luceño Oliva

---

- Junio 2021 -

## ÍNDICE

ÍNDICE.....	1
I. RESUMEN.....	3
II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.....	5
III. INTRODUCCIÓN.....	7
IV. LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.....	9
1. Presupuestos .....	9
1.1. Acción social de responsabilidad .....	12
1.2. Acción individual de responsabilidad .....	14
2. Deberes del Órgano de Administración.....	16
2.1. Deber de diligencia.....	16
2.2. Deber de lealtad.....	18
3. Responsabilidad del Órgano de Administración .....	20
3.1. Responsabilidad por incumplimiento de los deberes del Órgano de Administración .....	20
3.2. Responsabilidad objetiva del Órgano de Administración .....	23
4. Responsabilidad del Órgano de Administración en materia concursal .....	25
V. LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN A RAÍZ DE LA NORMATIVA DE EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19.....	29
1. La responsabilidad objetiva del Órgano de Administración a raíz de la normativa de emergencia por encontrarse incurso la sociedad en causa de disolución.....	29

1.1. La causa de disolución que acontece antes de la declaración del estado de alarma. ....	32
1.2. La causa de disolución que acontece durante el estado de alarma. ....	35
2. El caso especial de la disolución por pérdidas o desequilibrio patrimonial (363.1. e) LSC). ....	38
a. La disolución por pérdidas en 2020. ....	40
b. La disolución por pérdidas en 2021. ....	41
3. La responsabilidad del OA en el Concurso de Acreedores. Suspensión de obligación de declarar concurso. ....	43
VI. PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LA NORMATIVA DE EMERGENCIA. ....	47
VII. CONCLUSIONES. ....	55
VIII. BIBLIOGRAFÍA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA. ....	58
IX. ANEXOS. ....	61

## **I. RESUMEN**

El presente trabajo tiene por objeto realizar un estudio pormenorizado del deber legal del órgano de administración de instar la disolución o el concurso de acreedores por pérdidas de la sociedad y de la responsabilidad en la que pudieran incurrir el mismo si no actuara conforme a sus deberes correspondientes, considerando el impacto del COVID-19 en dicha obligación.

Para ello, en primer lugar, se analiza la regulación ordinaria, esto es, la Ley de Sociedades de Capital, desde el punto de vista de los presupuestos de las distintas responsabilidades, en que puede incurrir el órgano de administración, así como las acciones, individual y colectiva, mediante las que cabe para reclamar el cumplimiento de aquellas responsabilidades a dichos sujetos; además del análisis de los deberes principales de los administradores ( deber de diligencia y deber de lealtad). Por último, se trata la responsabilidad del órgano de administración social en materia concursal.

En segundo lugar, procederemos a analizar la normativa “COVID” o de emergencia que ha ido entrando en vigor a lo largo del último año, en relación con el tema objeto de estudio en el presente trabajo, es decir, la responsabilidad del órgano de administración.

De este modo, se atenderá a la responsabilidad objetiva de dicho órgano, por encontrarse incurso la sociedad en causa de disolución, analizando tanto la aparición de esta causa con anterioridad a la declaración del estado de alarma, como la aparición de la misma durante dicho estado.

Posteriormente, profundizaremos en el caso especial de la disolución por pérdidas o desequilibrio patrimonial (ex art. 363.1.e) LSC) en relación con la normativa

de emergencia, detallando las situaciones de disolución por pérdidas, por un lado, en el año 2020, y por el otro, en el año 2021.

Asimismo, estudiaremos la suspensión de la obligación de declarar concurso de acreedores en las entidades mercantiles, suspensión que se encuentra reflejada y recogida, de igual forma, por la normativa COVID.

Por último, en el apartado de problemas interpretativos que, de la normativa de emergencia, plantearemos ciertos aspectos que, a nuestro juicio, podrían crear conflicto y futuros problemas de interpretación, todo ello, a raíz de lo recogido por las normas de emergencia, las cuales, sin duda, tratan de proteger y ayudar a la sociedad y administrador en cuestión, pero que, por otro lado, alumbran una serie de obstáculos a los que estos sujetos deberán enfrentarse.

**Palabras clave:** órgano de administración, responsabilidad, deberes, COVID-19, estado de alarma, suspensión, disolución, deudas, desequilibrio patrimonial, concurso de acreedores.

## **II. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA**

El principal objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre algunas de las medidas adoptadas por el gobierno español a raíz de la pandemia generada por el Covid-19, la cual ha ocasionado cambios en todos los ámbitos dentro de nuestro Estado de Derecho, y que han obligado al poder ejecutivo a ir adoptando diversas disposiciones para intentar paliar los efectos de esta crisis global.

Más concretamente, el estudio repasará en primer lugar la normativa reguladora de la responsabilidad del órgano de administración en la Ley de Sociedades Capital, con el fin de adentrarnos posteriormente en el estudio y análisis pormenorizado de la los cambios en la responsabilidad del órgano de administración a raíz de la normativa de emergencia ocasionada por el Covid-19.

Para entender de una forma eficaz los cambios en esta materia procederemos a explicar la normativa de emergencia recientemente aprobada, esto es, las medidas adoptadas en el ámbito mercantil relacionadas con la responsabilidad de la administración social de las entidades mercantiles.

De acuerdo con lo anterior, la normativa traída a colación, en lo relativo a las nuevas medidas de emergencia impuestas para paliar esta situación de crisis, es la siguiente:

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

- Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
- Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Además del análisis previo de la normativa vigente, esto es, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Atendiendo a la metodología empleada, el procedimiento para lograr la redacción del presente trabajo ha sido la selección y lectura de artículos doctrinales en la web y artículos legales de diferentes firmas de abogados de reconocido prestigio, dada la complejidad, especificidad y actualidad de la temática planteada. Las bases jurídicas que han guiado el presente trabajo han sido entre otras: Aranzadi, noticiasjurídicas.com, V|Lex, Tirant Online, La Ley Digital, BOE. Cabe citar también los diferentes portales académicos que me han servido para alcanzar cierta información empleada en la disposición del trabajo, como sería Dialnet, Scholar Google y la Biblioteca de la Universidad Loyola Andalucía.

### **III. INTRODUCCIÓN**

La actual situación de pandemia, y la consiguiente declaración del estado de alarma, ha situado a muchas empresas en una difícil y compleja situación económica, no teniendo en algunos casos otra solución más que la de optar por el procedimiento de disolución de la sociedad, y/o por la solicitud de declaración del concurso de acreedores.

Uno de los interrogantes que los empresarios se plantean ante esta situación es ¿Qué ocurre con la responsabilidad del órgano de administración social a raíz de la declaración del estado de alarma o de la normativa de emergencia? La responsabilidad de los administradores surge como consecuencia del incumplimiento de los deberes inherentes al órgano de administración, es más, el Informe de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo de fecha 14 de octubre de 2013, ya expresaba que *"los deberes de los administradores y su régimen de responsabilidad son parte del núcleo central del gobierno corporativo"*.

La normativa recientemente dictada en España para hacer frente al Covid-19 comprende un conjunto de normas dirigidas a intentar que las empresas obtengan el tiempo necesario para adoptar las medidas correspondientes para reestructurar y sanear su situación financiera y económica. La legislación promulgada durante el estado de alarma ha venido a flexibilizar temporalmente la aplicación de los preceptos recogidos en la Ley de Sociedades de Capital con la finalidad de evitar que la mayoría de las sociedades deban instar su disolución o declarar concurso de acreedores.



En el caso de las sociedades de capital, además de ciertas medidas que se extinguirán al finalizar el estado de alarma, se han adoptado dos reglas, entre otras, que tienen una gran importancia para los operadores del tráfico mercantil y, particularmente, para las sociedades de capital:

- La suspensión del deber legal de promover la disolución por pérdidas o desequilibrio patrimonial hasta el cierre del ejercicio social del año 2021.
- La suspensión del deber legal de solicitar el concurso de acreedores hasta el próximo día 31 de diciembre de 2021.

En los siguientes apartados se analizará el contenido de las normas que disponen la suspensión del deber de promover la disolución y la situación en la que quedan los administradores de las sociedades de capital en este contexto, desde el punto de vista de sus deberes y responsabilidad.

#### **IV. LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN EN LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.**

##### **1. Presupuestos**

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, (en adelante, LSC) por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, supuso una importante modificación en el régimen de la responsabilidad de los administradores sociales, con el fin de endurecer dicha responsabilidad, imprimiendo un carácter más “eficaz” y “severo”. La mencionada reforma abordó principalmente dos aspectos, los presupuestos objetivos o sustantivos esenciales y los presupuestos subjetivos para la exigencia de la responsabilidad.

La referida reforma no alteró el tratamiento procesal para exigir la responsabilidad de los administradores sociales, permaneciendo el sistema de acciones contra la responsabilidad de éstos inalterado, esto es, acción la social de responsabilidad (*ex art. 238 LSC*), la acción individual de responsabilidad (*ex art. 241 LSC*) y la acción de responsabilidad por deudas u objetiva (*ex art. 367 LSC*), sin ser excluyente el régimen de la responsabilidad concursal ni del ejercicio de acciones comunes como, por ejemplo, la impugnación de acuerdos sociales, la anulación de contratos, la cesación y la remoción de efectos.

Partiendo de la naturaleza del cargo de los administradores, cabe distinguir varios tipos de responsabilidad en que pueden incurrir en función de la norma que infrinjan: mercantil, penal, tributaria, administrativa o laboral, porque no existe en nuestro ordenamiento un régimen único de responsabilidad de los administradores, sino que nos encontramos con ciertas especialidades respecto del régimen común de

responsabilidad civil, dada la profesionalización y ámbito en el que desarrollan su actividad los administradores y diligencia exigible a los mismos.

El régimen de responsabilidad societaria de los administradores, actualmente, es común a las sociedades anónimas y limitadas, cuyo presupuesto radica en el art. 236.1 LSC, donde se articula lo siguiente:

*“1. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa.*

*La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales.”*

Del tenor del artículo y su interpretación doctrinal podemos extraer los siguientes presupuestos para considerar que existe este tipo de responsabilidad:

- 1) Que el daño que produce la actuación del administrador sea sufrido por la propia Sociedad, lo que le legitima para interponer la acción social de responsabilidad.
- 2) Que el incumplimiento de las obligaciones, por parte de los administradores, sea debido a actos u omisiones contrarios a la LSC o los estatutos sociales, o por los realizados en incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del cargo.

- 3) Que exista una relación de causalidad entre los dos presupuestos anteriormente citados, esto es, para que se considere culpable la actuación del administrador deberá existir relación de causalidad entre su actuación ilícita y el daño producido.
- 4) Que se cuantifique económicamente el daño producido por la actuación u omisión del administrador, resultando de prueba obligatoria para el actor que interponga la acción judicial que, en cada caso, corresponda.

En relación con la forma de reclamar esta responsabilidad en vía judicial, la LSC distingue entre la acción social e individual de responsabilidad, dependiendo de que el patrimonio directamente dañado por el acto u omisión de los administradores sea el de la sociedad, el de los socios o el de terceros.

En atención a la Sentencia del Tribunal Supremo 485/2018, de 18 de julio de 2018, la jurisprudencia tradicionalmente ha distinguido el régimen de responsabilidad del administrador de una sociedad frente a terceros, según derivase la actuación del administrador en cuestión de actos en el ejercicio de su cargo, siendo en este caso regulado por la LSC, o por el contrario, derivara de actos realizados en la esfera personal, ajena al cargo de administrador, siendo en tal caso no operable el régimen normativo societario, aplicándose la normativa civil extracontractual recogida en los arts. 1902 del Código Civil (en adelante, CC).

En el presente apartado abordaremos la responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo, distinguiendo entre la acción social, la acción individual y la acción de responsabilidad por deudas.

### 1.1. Acción social de responsabilidad

La acción social de responsabilidad contra los administradores se diferencia de la acción individual, atendiendo al patrimonio de la sociedad que ha sufrido el daño, de forma que si se trata del patrimonio social corresponderá la acción social siendo su objetivo restaurar el patrimonio social dañado; sin embargo, si se trata del patrimonio individual de un socio o un tercero, corresponderá la acción de responsabilidad individual, siendo su objetivo el de indemnizar directamente el daño causado al tercero.

La regulación de la acción social de responsabilidad contra los administradores viene desarrollada en el art. 238 y siguientes LSC. Los requisitos para el ejercicio de esta acción aparecen recogidos en la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 221/2018, de 16 de abril de 2018, la cual expresa el siguiente tenor literal:

*“No cabe duda que la acción ejercitada es la acción social de responsabilidad. Acción que en el presente caso y de acuerdo con la doctrina jurisprudencial de esta Sala (entre otras, STS 281/2017, de 10 de mayo) cumple con los requisitos exigidos para su aplicación, esto es,*

- La existencia de un comportamiento activo o pasivo desarrollado por los administradores.*
- Que el mismo se imputable al órgano administrativo en cuanto tal.*
- Que la conducta del administrador merezca la calificación de antijurídica, por infringir la Ley, los Estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de*

*diligencia exigible a un ordenado empresario y un representante leal.*

- *Que la sociedad sufra un daño.*
- *Que exista una relación de causalidad entre el actuar del administrador y el daño.’’*

Se encuentran legitimados activamente para el ejercicio de la acción social de responsabilidad:

1. La sociedad, que debe promoverla mediante un acuerdo de la junta general de socios, adoptado por mayoría ordinaria y que determina de forma automática la destitución de los administradores.
2. Con carácter subsidiario, en caso de que la sociedad no ejercite la expresada acción social, podrán hacerlo los socios que, individual o conjuntamente, alcancen, al menos, un 5% del capital social, cuando:
  - a) los administradores no hubiesen convocado la junta general a tal fin;
  - b) la sociedad no hubiese entablado la acción en el plazo de un mes desde la adopción del acuerdo; o
  - c) el acuerdo hubiera sido contrario a la exigencia de responsabilidad.

Asimismo, y sin necesidad de que se someta la decisión a la junta general, cuando la acción se fundamente en la infracción del deber de lealtad por los administradores, los socios, que cumplan los requisitos arriba mencionados, podrán ejercitar directamente la acción.

3. En defecto de los dos puntos anteriores, los acreedores de la sociedad podrán ejercitar la acción social, siempre y cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para satisfacer los créditos de los mismos.

## **1.2. Acción individual de responsabilidad**

La acción individual de responsabilidad es una acción directa y principal, no subsidiaria, que se otorga a los socios y terceros para recomponer su patrimonio particular que resultó afectado directamente por los actos de los administradores.

Se trata de aquellos supuestos en que se produce un perjuicio directo a los socios o acreedores, siendo de aplicación lo regulado en el art. 241 LSC que desarrolla lo siguiente: *“Quedan a salvo las acciones de indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos de administradores que lesionen directamente los intereses de aquellos.”*

Esta acción supone una especial aplicación de la responsabilidad extracontractual integrada en el marco societario, que cuenta con una regulación propia (art. 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1.902 CC<sup>1</sup>. Se trata de una responsabilidad por ilícito orgánico, entendida como la contraída por el administrador social en el desempeño de sus funciones del cargo.

---

<sup>1</sup> Sentencias del Tribunal Supremo n.º 253/2016, de 18 de abril; n.º 472/2016, de 13 de julio; 129/2017, de 27 de febrero; y 150/2017, de 2 de marzo.

Según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo<sup>2</sup>, los presupuestos de esta acción son los siguientes:

1. Un comportamiento activo o pasivo de los administradores.
2. Que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal.
3. Que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal.
4. Que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño.
5. Que el daño que se infiere sea directo al tercero, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad.
6. La relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero.

Al margen de esta acción individual contra los administradores prevista en el art. 241 de la LSC, los acreedores pueden ejercer contra los administradores de una sociedad la acción de responsabilidad solidaria prevista en el art. 367 de la LSC, también conocida como acción de responsabilidad por deudas, la cual detallaremos en los apartados siguientes del presente trabajo.

---

<sup>2</sup> Sentencia del Tribunal Supremo n.º 87/2019, de 13 de febrero de 2019.



## **2. Deberes del Órgano de Administración**

Son numerosos los deberes y responsabilidades que se otorgan al órgano de administración de una sociedad, resumidamente podrían enumerarse del siguiente modo:

- Deber de diligencia (art. 225 LSC).
- Deber de lealtad (art. 226 LSC).
- Prohibición de utilizar el nombre de la sociedad y de invocar la condición de administrador (art. 227 LSC).
- Prohibición de aprovechar oportunidades de negocio (art. 228 LSC).
- Deber de comunicación de las situaciones de conflicto de interés con la sociedad (art. 229 LSC).
- Prohibición de competencia (art. 230 LSC).
- Deber de secreto (art. 232 LSC)

Es objeto del presente trabajo realizar un breve análisis de dos de los deberes que resultan pilares fundamentales básicos para el correcto funcionamiento del órgano de administración: deber de diligencia y deber de lealtad.

### **2.1. Deber de diligencia**

Los administradores deben desempeñar el cargo con la diligencia de un “ordenado empresario”. El deber de diligencia se configura en la LSC como una pauta de conducta y como una fuente de obligaciones. Los administradores han de cumplir los diferentes deberes impuestos por la ley, por los estatutos y por otras normas internas de conducta de la sociedad, con este nivel de diligencia.

Si bien es verdad que el actual art. 225 LSC exige que los administradores, en sus funciones gestoras, sigan teniendo que actuar con la diligencia de un ordenado empresario, este parámetro deber ser evaluado en función de las aptitudes profesionales

y de los conocimientos que objetivamente se espera de quien debe gestionar una empresa como si fuera su propio negocio.<sup>3</sup>

El deber de actuar de modo diligente se configura atendiendo a diferentes circunstancias concretas que se aplican a cada administrador en cuestión, de forma que, entre las mismas, han de considerarse, por ejemplo, las características de la sociedad administrada correspondiente, siendo principalmente determinantes las siguientes dos:

- (i) La sociedad puede estar administrada por un órgano de administración con diversas estructuras (administrador único, administradores solidarios o mancomunados, consejo de administración). Para determinar la diligencia exigible habrá de tenerse en cuenta dicha estructura, pues determinará significativamente el modo en que han de ejercerse los deberes propios del cargo.
- (ii) La función que corresponde al órgano de administración del que se es miembro, ya que, a diferencia de si la sociedad estuviera administrada por un administrador único, o por varios administradores (mancomunados o solidarios), éstos están llamados a cumplir las mismas funciones en la administración de la sociedad; en el caso del consejo de administración, cada miembro puede tener atribuidas funciones distintas.

Dentro de este deber de diligencia, se encuadran diferentes deberes “implícitos” que el órgano de administración social deberá cumplir, como serían, por ejemplo: deber de ejercer efectivamente el cargo, deber de vigilancia o supervisión, deber de informarse

---

<sup>3</sup> CERRATO CRESPÁN, I. (2015) *El deber de diligencia de los administradores y la protección de la discrecionalidad empresarial*. Págs. 75-84.

o la protección de la discrecionalidad empresarial, desarrollados por el art. 225 y 226 LSC.

## **2.2. Deber de lealtad.**

El deber de lealtad requiere que el administrador ejerza sus funciones en todo momento en interés de la sociedad. El art. 227.1 LSC actúa como cláusula general que establece el deber de los administradores de *“desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad.”*

Esta norma es la pieza central del sistema, a partir de la cual se articula un conjunto de prohibiciones y de comportamientos tipificados como contrarios al deber, desarrollados en los arts. 228 LSC (Obligaciones básicas del deber de lealtad) y 229 LSC (Deber de evitar situaciones de conflicto).

De este modo, las obligaciones básicas del deber de lealtad se podrían estructurar de la siguiente forma:

- A) No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas.
- B) Guardar secreto sobre informaciones, datos, informes o antecedentes a los que hayan tenido acceso en el desempeño de su cargo. Incluso cuando hayan cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.
- C) No participar en la deliberación y votación de acuerdos en los tengan conflicto de intereses. Ya el administrador, ya una persona vinculada al mismo. Ya sea directo o indirecto. Excepto las que le afecten en su condición de administrador.

D) Desempeñar sus funciones bajo el principio de responsabilidad personal.

Con libertad de criterio e independencia respecto de instrucciones y vinculaciones de terceros.

E) Adoptar medidas para evitar que sus intereses puedan entrar en conflicto con el interés social. Así como con sus deberes para con la sociedad, ya sean por cuenta propia o ajena.

De igual forma, los administradores sociales deberán abstenerse de realizar las siguientes actuaciones:

A) Aprovecharse de oportunidades de negocio de la sociedad o hacer uso de sus activos sociales.

B) Aprovecharse de su condición como administrador para influir indebidamente en la realización de operaciones privadas, entre otras.

C) La generación o agravación de la insolvencia de una sociedad también refleja una conducta dolosa por parte del administrador. Supone una infracción de su deber de lealtad.

Asimismo, es importante tener en cuenta que el deber de lealtad es un deber de orden público y su regulación tiene carácter imperativo, de manera que no serán conforme a derecho las disposiciones estatutarias que puedan limitarlo o contrariar al mismo.

El deber de lealtad otorga seguridad a los socios, pues de su incumplimiento por parte de los administradores sociales derivarán sanciones que éstos pueden interponer.

### **3. Responsabilidad del Órgano de Administración**

El régimen de responsabilidad del órgano de administración en el que se encuentran sujetos los administradores sociales contempla dos supuestos básicos de aplicación:

- La responsabilidad por daños, la cual supone la producción de un perjuicio a la sociedad, a los socios o a los acreedores sociales.
- La responsabilidad por deudas sociales, determinada por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, en particular la de promover la disolución de la sociedad ante determinadas situaciones, o la de instar el concurso.

#### **3.1. Responsabilidad por incumplimiento de los deberes del Órgano de Administración**

El art. 236 LSC, tras la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de mejora del Gobierno Corporativo, lleva por rúbrica "presupuestos y extensión subjetiva de la responsabilidad", y establece en su apartado 1º el siguiente tenor literal:

*"Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa. La culpabilidad se presumirá, salvo prueba en contrario, cuando el acto sea contrario a la ley o a los estatutos sociales."*

Se incide en el criterio subjetivo de imputación de responsabilidad, ya que, para que se genere la misma, se precisará que en la actuación lesiva causada por el

administrador haya intervenido dolo o culpa. Además, con la mencionada reforma, se invierte la carga de la prueba de la culpabilidad del administrador, de forma que se presume su concurrencia cuando el acto contravenga la ley o los estatutos sociales.<sup>4</sup>

La responsabilidad societaria se proyecta sobre los administradores (de hecho o de derecho) de la sociedad, así el art. 236 LSC aclara que la responsabilidad comprende a los administradores de hecho e incorpora una definición de situaciones que explican tal tipo de administración. Además, del articulado en cuestión, observamos que no sería posible, en principio, extender la responsabilidad societaria a los directores generales y apoderados, debido a que ni unos ni otros entran dentro del ámbito de extensión subjetiva de este tipo de responsabilidad.<sup>5</sup>

De igual modo, las personas jurídicas pueden ser administradoras de una sociedad y es frecuente que en la administración de las sociedades participen personas jurídicas. Para ello, la persona jurídica administradora tiene que designar a una persona física que la represente. La persona física deberá reunir los requisitos que establece la ley para los administradores. Asimismo, estará sometida a los mismos deberes que los administradores y responderá solidariamente con la persona jurídica administradora, es decir, que se podrá exigir responsabilidad, indistintamente, tanto a la persona física representante como a la persona jurídica administradora. Conviene destacar que nunca se exonera de responsabilidad a la persona física representante por el hecho de que actúe siguiendo las instrucciones dadas por la persona jurídica administradora, sin perjuicio, naturalmente, de la relación interna que pueda establecerse entre ellas.

---

<sup>4</sup> ORELLANA CANO, N.A.; CAMPUZANO/SANJUÁN (Coords.) (2017) *El órgano de administración. Guía de Sociedades de capital*. Sepín, pág. 288.

<sup>5</sup> FACHAL NOGUER, N. (2018) *El régimen de responsabilidad del órgano de administración plural*. Tribuna Lefebvre.

El art. 237 LSC establece la responsabilidad solidaria de todos los miembros del órgano de administración, en los casos de órgano plural, que hubieran adoptado el acuerdo o realizado el acto lesivo, con la salvedad de "los que prueben que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a aquél".

Si el administrador social no intervino ni en la adopción ni en la ejecución del acuerdo o acto lesivo, pero tenía conocimiento de su existencia, habrá de desplegar otro tipo de actividad probatoria, como, por ejemplo, acreditar que hizo todo lo conveniente para evitar el daño o, al menos, que se opuso expresamente al acuerdo o acto causantes del daño.

De este modo, cabrá la posibilidad de que el administrador demuestre que ha cumplido con su deber de diligencia y que ha adoptado las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad (art. 225.2 LSC), lo que significará que inició las actuaciones necesarias para evitar el resultado dañoso. Las conductas que exoneran de responsabilidad no alcanzan la mera inactividad precedida del conocimiento de la existencia del acto o acuerdo lesivo, es más, se considera que la mera pasividad de los administradores ante conductas que lesionan los intereses de la sociedad, ejecutadas por terceros, es suficiente para apreciar la existencia de responsabilidad.<sup>6</sup>

En definitiva, para que un administrador pueda ser considerado responsable deberán concurrir los siguientes presupuestos, en aplicación a las reglas generales de la responsabilidad civil:

---

<sup>6</sup> Sentencia del Tribunal Supremo nº 670/2010, de 4 de noviembre.

- que se produzca un acto u omisión del administrador;
- que ese acto u omisión sea contrario a la ley, a los estatutos de la sociedad o suponga un incumplimiento de los deberes derivados del cargo de administrador;
- que ese acto u omisión cause un daño que sea real y evaluable económicamente, bien a la sociedad o bien a los intereses de los socios o de los terceros; el daño causado incluye tanto el daño emergente (disminución real y efectiva experimentada por el patrimonio) como el lucro cesante (beneficio que con alta probabilidad o casi certeza el perjudicado hubiera dejado de obtener);
- que la conducta del administrador sea intencionada o negligente (se presume, salvo prueba en contrario, que existe negligencia cuando el acto u omisión sea contrario a la ley o a los estatutos de la sociedad); y
- que el daño causado sea consecuencia del acto u omisión del administrador, de manera que pueda relacionarse causalmente con su conducta (se excluyen los daños producidos por causas imprevisibles o que, siendo previsibles, no se pudieran evitar).

### **3.2. Responsabilidad objetiva del Órgano de Administración**

Este tipo de responsabilidad es mayoritariamente conocido como responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad, regulada en el art. 367 LSC.

En primer lugar, cabe indicar que la Ley de Sociedades de Capital, en su art. 363, establece que las sociedades de capital (anónima o limitada), deberán proceder a su disolución, de forma obligatoria, en los supuestos que marca dicho articulado, siendo los más habituales, por ejemplo, el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el



objeto social, o por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social.

Para evitar una posible declaración de responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad, y encontrándose en causa de disolución, lo que deberá hacer el administrador es convocar la junta general de la sociedad en el plazo de dos meses para que adopte acuerdo de disolución, o para los casos en que la sociedad fuera insolvente, declarar concurso de acreedores.

Las consecuencias que tienen los administradores si incumplieran esta convocatoria de disolución o declaración de concurso de acreedores, en el plazo legalmente establecido de dos meses, son las de asumir la responsabilidad solidaria de las deudas contraídas por la sociedad. Dicho lo anterior, la responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad solo lo será de las deudas contraídas con fecha posterior a la causa de la disolución, pero no de las deudas anteriores. Como apoyo jurisprudencial de referencia, encontramos la Sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Primera n.º 246/2015, de 14 de mayo de 2015, la cual analiza pormenorizadamente los criterios para declarar la responsabilidad de los administradores por deudas.

Por último, cabe añadir que el plazo para ejercitar la acción de responsabilidad por deudas será de cuatro años. El problema radica en la fecha desde la que se ha de contar dicho plazo de cuatro años. Un sector de los Tribunales opina que el plazo de prescripción es el de 4 años previsto en el art. 241 bis LSC y por tanto se ha de contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse<sup>7</sup>. Otro sector opina que el plazo de

---

<sup>7</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) n.º 983/2020, de 29 de mayo de 2020.

prescripción de cuatro años para esta acción es el previsto en el art. 949 del Código de Comercio y por tanto se ha de contar desde el cese del administrador en el ejercicio de su cargo<sup>8</sup>.

#### **4. Responsabilidad del Órgano de Administración en materia concursal**

La responsabilidad concursal es un tema clave en el concurso de acreedores, debido a que prácticamente en ningún concurso quedan satisfechos todos los créditos de los acreedores, de forma que, si el concurso es declarado finalmente culpable, los administradores de la sociedad deberán satisfacer dichos créditos con todos sus bienes presentes y futuros.

La responsabilidad concursal, dispuesta hoy en el art. 456 del texto refundido de la Ley Concursal (antiguo art. 172 bis LC), encuentra su sustrato en nuestra legislación societaria, particularmente, en los deberes inherentes al cargo de administrador que dicho texto legal impone.

Establece la normativa concursal que la declaración de concurso procederá en caso de insolvencia del deudor, es decir, cuando el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. El deudor no sólo está legitimado para solicitar su declaración de concurso, sino que deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia, destacando que, si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación.

Por otra parte, el artículo 164 de la Ley Concursal establece que el concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia

---

<sup>8</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 1ª) n.º 245/2020, de 16 de abril de 2020.

hubiera mediado dolo o culpa grave de sus administradores o liquidadores. Se presumirá culpable el concurso cuando los administradores hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso, o el deber de colaboración con el Juez del concurso, entre otros casos.

Este régimen se completa con el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital que dispone que responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución, los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad.

Para que los administradores sociales, de hecho y de derecho, incurran en responsabilidad concursal, deben tener lugar los siguientes presupuestos deducidos del art. 456 TRLC:

- Que la sección de calificación haya sido formada o reabierta a consecuencia de la apertura de la fase de liquidación.
- Cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa grave del deudor, o si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, directores generales, de quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.
- Que exista el déficit concursal, es decir, cuando existan acreedores que no han visto satisfechos sus créditos.

Habría que destacar del primer presupuesto que la apertura de la sección de calificación se produce en la misma resolución judicial en la que se aprueba el

convenio, el plan de liquidación o se ordene la liquidación conforme a las normas legales supletorias. Asimismo, la reapertura de la sección de calificación sólo se produce cuando tiene lugar el incumplimiento de los concursos "gravosos", esto es, cuando existan quitas superiores a un tercio de la cuantía de los créditos; o, existan esperas superiores a 3 años.

Por otro lado, si el convenio tuviera contenido "gravoso" por contener las dos circunstancias señaladas anteriormente, no podría exigirse la responsabilidad concursal, incluso en los casos en que fuera declarado el concurso como culpable, pues al cumplir el convenio no se procedería a la apertura de la fase de liquidación de la sociedad en concurso.

Atendiendo al segundo de los presupuestos expresados, se deberán dar los siguientes requisitos para declarar el concurso como culpable:

- ✓ Comportamiento activo u omisivo del deudor o de sus representantes legales; o en el caso de las personas jurídicas, de sus administradores o liquidadores de hecho o de derecho.
- ✓ Generación o agravación del estado de insolvencia.
- ✓ Que sea imputable a dichas personas a título de dolo o culpa grave, por lo que queda excluida la culpa leve.
- ✓ Nexos causal entre la conducta de la persona afectada por la calificación y la generación o agravación del estado de insolvencia.

Cabe señalar que la calificación culpable del concurso podría afectar tanto a los que hayan sido administradores de derecho como los administradores de hecho de la

persona jurídica deudora, aunque exclusivamente a quienes lo hayan sido los dos años anteriores a la declaración del concurso. De forma que podría acontecer que el concurso se califique como culpable por un comportamiento doloso y a su vez no exista persona afectada en la que se pueda derivar la responsabilidad concursal.<sup>9</sup>

En relación con el tercer presupuesto, relativo al déficit concursal, el Juez del concurso fija la cuantía de la condena del déficit atendiendo al modo en que las distintas conductas han generado o agravado la situación de insolvencia. Tal concepto de déficit consiste en la diferencia existente entre los importes de los créditos concursales reconocidos y de los créditos satisfechos con el resultado de la liquidación.

---

<sup>9</sup> Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, n.º 574/2017 y n.º 575/2017, de 24 de octubre de 2017.

## **V. LA RESPONSABILIDAD DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN A RAÍZ DE LA NORMATIVA DE EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID-19.**

### **1. La responsabilidad objetiva del Órgano de Administración a raíz de la normativa de emergencia por encontrarse incurso la sociedad en causa de disolución.**

En el presente apartado se tratarán los cambios introducidos, a consecuencia de la crisis sanitaria, en la regulación de la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales.

Parte del régimen general expuesto en el apartado anterior quedó en suspenso con motivo de las modificaciones, de carácter temporal, desarrolladas en las normas de emergencia.

En primer lugar, nos encontramos con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 (en adelante, RDL 8/2020), más concretamente, la normativa mercantil queda encuadrada en los artículos 40 y 41 del mencionado texto legal.

Entrando en el análisis de la responsabilidad objetiva de los administradores a raíz de las normas de emergencia, el art. 40.11 de la precitada norma dispone lo siguiente:

*“En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general*

*de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma.’’*

De este modo, añade el art. 40.12 del mismo cuerpo legal, que:

*‘‘Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.’’*

Posteriormente, entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, modificando el art. 40 del RDL 8/2020, no obstante, los apartados 11 y 12, relativos al estudio del presente trabajo, no fueron modificados.

Asimismo, más tarde, vino el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (en adelante, **RDL 16/2020**). En su art. 18 (suspensión de la causa de disolución por pérdidas) se disponía que:

*‘‘1. A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020. Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá*

*solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente*

*2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso de acuerdo con lo establecido en el presente real decreto-ley.”*

No obstante, el RDL 16/2020 ha sido derogado, tras su correspondiente convalidación parlamentaria, por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (en adelante, **Ley 3/2020**). De este modo, el art. 13 de la Ley 3/2020 sustituye al art. 18 RDL 18/2020.

La Ley 3/2020 ha sido parcialmente modificada mediante DA Décima del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (en adelante, **RDL 34/2020**). Aunque el RDL 34/2020 no afecta al art. 13 de la Ley 3/2020, sin embargo, cabe destacar, a pesar de que será desarrollado con más amplitud en el apartado correspondiente a la materia concursal, que el art. 6.1 Ley 3/2020 (anterior art. 11 RDL 16/2020), tras la modificación producida por el RDL 34/2020, exonera al deudor del deber de solicitar el concurso hasta el 14 de marzo de 2021, puesto que la Ley 3/2020 había mantenido la fecha del 31 de diciembre de 2020 como fecha límite para la extensión del plazo de solicitud de concurso voluntario introducida por el RDL 16/2020.



Una vez realizado el hilo temporal que traen a colación estas normas expuestas que regulan las causas de disolución y la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales, damos paso a realizar un análisis pormenorizado de cuanto se regula. Los términos en que se desarrollan los arts. 40.11 y 40.12 RDL 8/2020 hacen que debamos realizar una distinción según el momento de concurrencia de la causa de disolución: antes del estado de alarma, durante el estado de alarma, y después del estado de alarma.

### **1.1. La causa de disolución que acontece antes de la declaración del estado de alarma.**

Ante la concurrencia de disolución, se produce la activación de los deberes específicos de los administradores sociales en orden a la disolución de la sociedad.

El primer deber consiste en la adopción del acuerdo de convocar junta general con las formalidades legales en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de la causa de disolución (art. 365.1 LSC). Como segundo deber, además de la obligación de convocar junta general de socios y llegar a un acuerdo, en los casos en que no se consiguiera acuerdo de disolución, tendrán el deber de promover la disolución judicial de la sociedad (art. 366.2 LSC), dicha disolución judicial habrá de instarse en el plazo de dos meses al juzgado de lo mercantil del domicilio social, contado desde la fecha en que se celebró la junta general o se pretendía celebrar la misma.

El incumplimiento de las obligaciones indiciadas producirá la responsabilidad de los administradores que, según el art. 367.1 LSC, responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución.

Por tanto, si el acaecimiento de la causa de disolución se produjo antes del estado de alarma y el plazo de dos meses que se refiere el art. 365.1 LSC también había transcurrido en ese momento sin que se hubiera convocado la preceptiva junta, los administradores responderán por las deudas sociales posteriores, ya que se habrían producido los dos efectos desencadenantes de la responsabilidad del art. 367 LSC (acaecimiento de la causa legal o estatutaria de disolución e incumplimiento de los deberes específicos de los administradores relativos a la disolución o remoción de la causa de disolución). Parece razonable entender que entre esas obligaciones sociales posteriores estarán también las contraídas durante el estado de alarma, porque no hay en las normas de emergencia una previsión que restrinja la extensión de la responsabilidad de los administradores a esas obligaciones.

De lo anterior, cabe apreciar que la disposición que establece la ausencia de responsabilidad de los administradores por las deudas surgidas en ese tiempo se limita en el art. 40.12 RDL 8/2020 a los casos en que *“la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma”*, no siendo de aplicación, por tanto, si la causa se produjo antes. Asimismo, hay que llamar la atención sobre que las normas de emergencia no impedían que, de forma voluntaria, se produjera la convocatoria y consiguiente celebración de la junta para decidir sobre la disolución.

Si los administradores no han cumplido sus obligaciones, responderán de todas las obligaciones posteriores al momento de concurrencia de la causa de disolución, incluidas, por tanto, aquellas contraídas durante el estado de alarma, por definición posteriores en este caso.

El otro supuesto es aquel en el que al tiempo de la declaración del estado de alarma ya se había producido la causa legal o estatutaria de disolución, pero no habían

transcurrido los dos meses de que disponen los administradores para la convocatoria de junta. En estos casos, en virtud de la normativa de emergencia anteriormente citada, el plazo de dos meses quedaría en suspenso hasta el alzamiento del estado de alarma, reanudándose en tal momento.

De modo que, si la convocatoria de la junta o la adopción de las medidas para resolver la causa de disolución se produjo dentro del “plazo legal”, esto es, dentro del tiempo restante después del levantamiento del estado de alarma, no habría incumplimiento de las obligaciones específicas de los administradores, quienes no responderán de las deudas sociales surgidas en ese período.<sup>10</sup> A mayor abundamiento, podría afirmarse que la previsión del art. 40.12 del RDL 8/2020 es innecesaria, ya que la ausencia de responsabilidad de los administradores deriva del hecho de que, durante el estado de alarma, el mencionado plazo de dos meses estaría suspendido, y, por consiguiente, no se incumplirían las obligaciones relativas a la disolución de la sociedad.<sup>11</sup>

De otro modo, si transcurrió el tiempo restante desde el levantamiento del estado de alarma sin cumplir sus obligaciones, responderían de todas las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución, por lo que, siendo tal momento anterior a la declaración del estado de alarma, la responsabilidad se ampliará también a las contraídas en ese período.

Asimismo, en el caso de que se hubiere realizado un cumplimiento tardío, es decir, si los administradores convocaron la junta una vez transcurrido el plazo de dos

---

<sup>10</sup> Art. 40.12 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

<sup>11</sup> GARCÍA-VILLARRUBIA, M. (2021) *Legislación de emergencia y disolución por pérdidas: la responsabilidad de los administradores sociales y el estado de alarma*. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, n.º 92.

meses, dentro o posterior al estado de alarma, en ese supuesto el incumplimiento no produciría efectos respecto de los acreedores que en ese momento tenían el derecho de reclamar la responsabilidad de los administradores, únicamente se producirían respecto de las deudas sociales acaecidas tras ese cumplimiento tardío, que sería posterior al fin del período de vigencia del estado de alarma. Por lo expuesto, se aplicaría la extensión de la responsabilidad por las deudas contraídas durante el estado de alarma.

## **1.2. La causa de disolución que acontece durante el estado de alarma.**

En este sentido, resulta del art. 40.11 RDL 8/2020 que, si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, queda en suspenso la obligación de los administradores de convocar junta en los términos del art. 365.1 LSC.

Esta suspensión quedaría levantada tras el alzamiento del estado de alarma, de forma que, si en ese tiempo la sociedad no hubiere conseguido solventar la causa de disolución en cuestión, desde tal momento los administradores dispondrán de dos meses para convocar la junta referida en el art. 365.1 LSC.

Para los casos en que no se hubiese cumplido la expresada obligación, cuestión que resulta problemática, responderían de las obligaciones posteriores al momento de acaecimiento de la causa de disolución.

Sin embargo, surgen varios interrogantes al respecto, ¿Qué ocurre con las obligaciones posteriores a al momento de acaecimiento de la causa de disolución, pero que fueron contraídas durante el estado de alarma? ¿La previsión del art. 40.12 del RDL 8/2020 exonera la responsabilidad de forma plena, se haya producido o no el

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de los administradores una vez levantada la suspensión a que se refiere el art. 40.11 del mismo texto legal?

En principio, la norma abarca a todas las obligaciones sociales: *“los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período”*. Atendiendo a la literalidad de la norma, todo parece indicar que se está optando por una exoneración total de la responsabilidad de los administradores por todas las deudas acaecidas durante el estado de alarma. Por lo anterior, si la causa de disolución se produjo durante el estado de alarma, los administradores no responderían por las deudas sociales originadas en ese momento temporal, ni tampoco de las posteriores a la causa de disolución, a pesar de que no cumplieran con sus obligaciones de convocar junta una vez se levantara el estado de alarma; sí respondiendo, únicamente, por las obligaciones posteriores al levantamiento del estado de alarma.

Sin embargo, la interpretación anteriormente expresada puede no ser la apropiada, de forma que, coordinando ambos preceptos legales<sup>12</sup>, podría considerarse que la intención del legislador no es la de sancionar a esos administradores “descuidados” que incumplen sus obligaciones específicas. De forma que, entendiendo que el art. 40.12 del RDL 8/2020 se extendiera a las obligaciones posteriores a la aparición de la causa de disolución, estaríamos hablando de una medida cuya finalidad es la de primar ese comportamiento negligente de los administradores que continuaron causando que la sociedad contrajera obligaciones, pese a estar incurso en causa de disolución durante el estado de alarma, alterando de este modo la responsabilidad de los administradores, en su beneficio, y, además, en perjuicio de los terceros acreedores de la sociedad.

---

<sup>12</sup> Art. 40.11 y 4.12 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Por lo expuesto, resulta más razonable considerar que lo dispuesto por estos dos preceptos establece la suspensión de la obligación de convocar la junta general (obligación que queda alzada toda vez que se levantara el estado de alarma), haciendo que los administradores no respondan por las deudas contraídas en ese período, pero siempre que cumplan posteriormente con esa obligación específica de convocatoria, ex art. 365.1 LSC. En caso de no cumplir con dicha obligación, los administradores responderían por todas las deudas sociales surgidas desde el momento en que estuviera la sociedad incurso en causa de disolución, así como de las posteriores al estado de alarma, ex art. 367 LSC.

Para los casos en que la causa de disolución se hubiera comunicado con anterioridad al estado de alarma, los administradores dispondrían del tiempo restante para proceder al cumplimiento de sus obligaciones una vez se hubiere alzado la suspensión recogida en el art. 40.11 del RDL 8/2020, de forma que, si se incumplieran, responderían de todas las deudas sociales posteriores, incluyendo también aquellas deudas surgidas durante el estado de alarma. Por otro lado, si la causa de disolución hubiere aparecido durante el estado de alarma, los administradores dispondrían de del plazo completo de dos meses, ex art. 365.1 LSC, iniciándose el mismo una vez finalizada la vigencia del estado de alarma; y para los casos en que no se hubiesen cumplido las obligaciones, se responderá por todas las deudas posteriores a la causa de disolución, incluyendo aquellas deudas originadas durante el estado de alarma, pero sólo aquellas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución.<sup>13</sup>

Por último, y como consecuencia lógica a cuanto se ha analizado en este apartado, en los casos en que concurriera la causa de disolución después del estado de

---

<sup>13</sup> QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2021) *Los órganos societarios y el Estado de Alarma*. Diario La Ley, n.º 9675, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, p.15.

alarma, se aplicarán las reglas generales, de modo que, si los administradores incumplieran sus obligaciones (arts. 365 y 366 LSC), éstos responderán por las deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución (surgida tras al estado de alarma). En este caso, y con igual lógica, las deudas acaecidas durante el estado de alarma, al ser anteriores a la causa de disolución, nunca podrán serles exigidas a los administradores, ex art. 367 LSC.

## **2. El caso especial de la disolución por pérdidas o desequilibrio patrimonial (363.1.e) LSC).**

En virtud del *Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19*, se suspendió el plazo de dos meses del que disponían los administradores para convocar a la junta en los supuestos en que hubiere concurrido causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia del mismo. Además, el Real Decreto ha introducido la exoneración de responsabilidad de los administradores por deudas sociales contraídas durante la vigencia de dicho estado de alarma en el supuesto de que la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del mismo.

Además, el RDL 16/2020, tratando de atenuar excepcional y temporalmente las consecuencias que tendría sobre las sociedades en cuestión y sus administradores el deber de llevar a cabo las obligaciones dimanantes de las normas generales introducidas por la LSC, ha fomentado y posibilitado la inaplicación del deber de disolver la sociedad por pérdidas hasta 2022.

El legislador ha tratado de disminuir de cierta responsabilidad a los administradores sociales, de forma que ha establecido que las pérdidas del ejercicio 2020 no se tendrán en cuenta a la hora de comprobar si una sociedad ha incurrido en la causa de disolución por pérdidas.

De este modo, las sociedades cuyo ejercicio coincida con el año natural será el 1 de enero de 2022 cuando empiece a computar el plazo de dos meses para que los administradores convoquen la junta general para solventar la situación de disolución por pérdidas.

Sin embargo, la duda interpretativa surge en este caso, respecto de las sociedades cuyo ejercicio social no coincide con el año natural,

- ¿Cómo se computan en este supuesto las pérdidas de 2020?
- ¿Cuándo empieza a computar el plazo de dos meses para que los administradores convoquen la junta general en caso de disolución por pérdidas?<sup>14</sup>

Ante esta incertidumbre, parece que, de forma lógica, no se tendrán en cuenta las pérdidas de la parte del ejercicio social que coincida con el año 2020. El plazo de dos meses empezará a computar desde el primer cierre que se dé en 2021.

Tal y como hemos expresado en el apartado anterior, las normas de emergencia regulan previsiones específicas correspondientes a la causa de disolución por pérdidas (art. 363.1. e) LSC). Estas previsiones se refieren a los resultados de los ejercicios de 2020 y 2021, y regulan la forma de computar las pérdidas que se producen en esos

---

<sup>14</sup> VETTORAZZI, L. (2020) *Responsabilidad de las administraciones en tiempos del Covid-19*. Recuperado de [www.expansion.com/juridico/opinion/2020/06/24/5ef243e5e5fdea43258b45cb.html](http://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/06/24/5ef243e5e5fdea43258b45cb.html)



ejercicios a efectos de comprobar si incurren los administradores en responsabilidad por incumplir sus deberes. De este modo, haremos un análisis según cada uno de los dos ejercicios mencionados.

#### **a. La disolución por pérdidas en 2020.**

El art. 18 RDL 16/2020 y el art. 13 de la Ley 3/2020 establecen que: *“A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020”*. Es decir, para conocer si las pérdidas han dejado reducido el patrimonio neto a una cifra inferior a la mitad del capital social, no se computarán las pérdidas que se produjeron en el ejercicio 2020.

A colación de la normativa señalada en el párrafo anterior, surgen diversas dudas interpretativas que, en la actualidad, siguen dando que pensar, como, por ejemplo, sería la duda de si sería correcto computar las pérdidas del ejercicio 2020 si éstas se hubieran producido con anterioridad a la declaración del estado de alarma, y a raíz de las mismas se hubiera incurrido en causa de disolución. Pues bien, si la causa de disolución se hubiera producido antes de la declaración del estado de alarma, esta circunstancia debería haber quedado reflejada en el documento contable correspondiente, iniciándose en ese punto temporal el plazo preceptivo de dos meses, dando igual que, posteriormente, hubiesen entrado en vigor el RDL 16/2020 y la Ley 3/2020, por tanto, las sociedades que hayan acumulado pérdidas durante los ejercicios anteriores (es decir, 2019 y los precedentes) y tengan un patrimonio neto inferior al 50 por ciento del capital social, sí incurrirían en causa de disolución, no pudiendo estar protegidas por las normas

de emergencia<sup>15</sup>. De este modo, la regla anteriormente enunciada sólo sería aplicable a todas aquellas situaciones que hubiesen acontecido con posterioridad a la entrada en vigor de estas normas (no retroactivas), computándose todas aquellas pérdidas anteriores.

#### **b. La disolución por pérdidas en 2021.**

En relación con las pérdidas relativas al ejercicio 2021, el art. 18 del RDL 16/2020 y el art. 13 de la Ley 3/2020 reconocen que: *“Si en el resultado del ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.”*

De dicha previsión podemos obtener como primera conclusión que la obligación de los administradores de convocar junta general comienza en el momento exacto en que contablemente se produce esta causa de disolución, es decir, en cualquier momento del ejercicio social (doctrina mayoritaria apoyada por Uría-Menéndez, Beltrán o Rodríguez Ruiz de Villa), tesis rechazada por un sector minoritario (Sánchez Calero y Ángel Rojo) quienes abogan que el *“dies a quo”* a efectos de determinar cuándo los administradores deben convocar la junta que decida sobre la disolución es en el momento de la elaboración y cierre de las cuentas anuales. El juego de los arts. 363 y

---

<sup>15</sup> DORIA TÖLLE, C. (2020) *Disolución por pérdidas en tiempos de coronavirus*. El Derecho (Lefebvre).

365 LSC da lugar a que el desequilibrio patrimonial pueda apreciarse en cualquier momento, y una vez apreciado, al administrador se le abre un plazo de dos meses para disolver, concursar en su caso o remover. Si el administrador no actúa conforme a sus obligaciones, opera el art. 367 LSC. El art. 18 RDL 16/2020, sin embargo, sólo contempla los ‘resultados del ejercicio’ y, por tanto, lo que es objeto de comprobación en el cierre del ejercicio.<sup>16</sup> Hoy día debe tenerse en cuenta que con los sistemas informáticos de llevanza de la contabilidad la situación puede ser perfectamente conocida a la fecha del cierre, pero también es cierto que debe darse cierto plazo a los administradores para que tomen conciencia de cuál puede ser el mejor remedio para la sociedad, y convoquen junta con un orden del día determinado<sup>17</sup>.

Otro tema objeto de debate sería la duda de arrastrar o no al ejercicio 2021 las pérdidas del ejercicio 2020, para determinar si el resultado concurre en causa de disolución. La norma sólo se refiere a las pérdidas del ejercicio 2021, pero la contabilidad reflejaría también las pérdidas del ejercicio 2020, de forma que en ese punto serían también relevantes a los efectos de determinar si el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social<sup>18</sup>. No obstante, serían irrelevantes si no hay pérdidas registradas en el ejercicio 2021, aun teniendo un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social si resultó que en 2020 se produjeron tales circunstancias graves. Parece

---

<sup>16</sup> PEINADO GARCÍA, J.I. (2020) *Derecho de sociedades no analógico (Reflexiones sobre las medidas de excepción en materia de sociedades mercantiles)*. Diario La Ley, n.º 69. Editorial Wolters Kluwer, p. 24.

<sup>17</sup> GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A. (2020) *Fecha de la causa de disolución por pérdidas. Informe Mercantil de Abril 2020*. Recuperado de [www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-abril-de-2020-disolucion-por-perdidas-y-covid-19-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza/#fecha-de-la-disolucion-por-perdidas-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza-a-estos-efectos-covid-19](http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-abril-de-2020-disolucion-por-perdidas-y-covid-19-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza/#fecha-de-la-disolucion-por-perdidas-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza-a-estos-efectos-covid-19)

<sup>18</sup> RODRÍGUEZ MASEDA, J.C. (2020) *Año 2020: sin disolución por pérdidas*. Revista E-Dictum, n.º 100, p. 2.

más que razonable entender que la existencia de pérdidas en el ejercicio 2021 es requisito *sine qua non* para entender que se da la causa de disolución<sup>19</sup>.

### **3. La responsabilidad del OA en el Concurso de Acreedores. Suspensión de obligación de declarar concurso.**

La responsabilidad concursal se entiende a aquella responsabilidad que puede derivar en un concurso de acreedores a la administración social, tal y como se recoge en los arts. 441 a 461 y 700 del texto refundido de la Ley Concursal. Esta responsabilidad concursal podrá declararse cuando se abra la fase de calificación del concurso. Para que un concurso de acreedores llegue a ser declarado culpable (ex art. 442 TRLC) tendrá que haber mediado culpa grave o dolo del órgano de administración, de hecho, o de derecho, en la generación del estado de insolvencia dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso.

Merece especial mención en este apartado lo regulado por el art. 444 TRLC, relativo al deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Y es que, en virtud del art. 43.1 del RDL 8/2020 se establece que, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. El mencionado precepto se prorrogó mediante la entrada en vigor, derogando la anterior normativa, de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, que suspendió el mencionado deber de solicitar concurso hasta el día 31 de diciembre de 2020; posteriormente, se ampliaría, hasta el día

---

<sup>19</sup> PEINADO GARCÍA, J.I. (2020) Derecho de sociedades no analógico (Reflexiones sobre las medidas de excepción en materia de sociedades mercantiles). Diario La Ley, n.º 69. Editorial Wolters Kluwer, p. 24.

14 de marzo de 2021, mediante la Disposición final décima del Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. Por último, en virtud de la disposición final séptima del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, se ha vuelto a ampliar hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta moratoria exime de la obligación de solicitar el concurso de acreedores cuando existe el deber (*ex art. 363.1 e) LSC*) pero no exonera de la obligación de solicitar el concurso ante el agravamiento de la insolvencia y la evidencia de inviabilidad del negocio. Por ello, si una empresa ya se encuentra bajo estas características de inviabilidad manifiesta de su negocio, y el mantenimiento de la misma está agravando la situación de insolvencia, el órgano de administración no deberá esperar a agotar la referida moratoria para presentar el concurso voluntario de acreedores.

De lo anterior habría que tener en cuenta la posible calificación futura del concurso, el cual resultaría calificado como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiera mediado culpa grave o dolo del deudor o de sus representantes legales, de quien lo hubiera sido en los dos años previos a la declaración del estado de insolvencia.

De esta forma, cabe manifestar la existente situación en la que los administradores que, durante ese período de postergación, lleguen a la conclusión de que su compañía carece de viabilidad, deben o no acudir a la presentación del concurso, a pesar de la moratoria. O, dicho de otro modo, si a pesar de que se prescriba por las normas de urgencia que el deudor no tendrá el deber de solicitar la declaración del concurso, si el mismo considera la falta absoluta de viabilidad de su empresa, puede no presentar el concurso voluntario y actuar sin buscar esa solución futura, o, por el

contrario, debe acudir al concurso voluntario y actuar de la forma más diligente. Y es que, aun existiendo la moratoria concursal regulada por la normativa de emergencia, el órgano de administración social no quedaría protegido por tal normativa frente a una eventual exigencia de responsabilidades sustentada en la indicada concesión legal, pues una cosa es el derecho a poder acogerse a esta suspensión temporal del deber de declarar el concurso de acreedores, y otra distinta es acogerse a dicha prerrogativa para exonerarse de la responsabilidad, pues siempre se deberá actuar conforme al deber general de diligencia regulado en el art. 225 LSC.<sup>20</sup>

En relación con esta posible calificación del concurso por actuar en contra de los deberes legales de diligencia, quizás este escenario no encuentre su encaje en la causa del art. 444.1º TRLC, aunque sí podría ajustarse al caso del art. 442 TRLC, ya que, si la sociedad en cuestión estaba abocada al concurso, y no se hace nada al respecto, cuestión compleja sería la de defender al órgano de administración haber actuado con la diligencia de un ordenado empresario. Por lo expuesto, podría decirse que esa contribución del órgano de administración en la agravación del estado de insolvencia tendrá por seguro su consideración en una futura calificación culpable del concurso.

Por último, queda claro que, desde el punto de vista de la responsabilidad del órgano de administración, el mismo puede no verse expuesto a una responsabilidad concursal por las cuestiones analizadas en este apartado. No obstante, encajaría perfectamente incurrir en responsabilidad societaria en los casos en que, por ejemplo, los administradores continuaran contratando a sabiendas de que la situación económica de la compañía pudiera impedirle el cumplimiento de los mismos, ya que de este modo se estaría faltando a ese deber de diligencia inherente al órgano de administración, el

---

<sup>20</sup> BARBER MARRERO, L.A. y BETANCOR ÁLAMO, A.L. (2021) *La moratoria concursal no supone "per se" una "patente de corso" para la responsabilidad de los administradores*. El Derecho (Lefebvre).

cual deberá ser llevado en todo momento durante la vigencia de su cargo, es decir, la exención recogida en la normativa de emergencia en relación a la posibilidad de no declarar concurso durante el año 2020 y 2021, no obsta, en ningún caso, a que los administradores sigan contribuyendo al interés social, procurando paliar todo daño o perjuicio económico, o de cualquier índole, al que podría estar expuesta la mercantil.

## **VI. PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LA NORMATIVA DE EMERGENCIA**

Tras haber realizado un recorrido sobre la regulación normativa de emergencia, en relación con la responsabilidad del órgano de administración social y sus distintos deberes por causas de disolución y en materia concursal, se hace necesario tratar ciertos aspectos, a modo de reflexión final, que resultan de la redacción de estas nuevas normas, y que, a mi parecer, causarían cierta inestabilidad y problemática en el modo de proceder con los distintos deberes que le corresponden a los administradores sociales una vez se haya alzado la suspensión tanto del deber de disolución de la sociedad como de declarar concurso de acreedores.

En primer lugar, debemos plantear una situación que podría generar ciertos inconvenientes que afectarían a la responsabilidad del órgano de administración, y es que, en los casos en que sea obligatorio según ley, las cuentas deberán ser auditadas, de forma que el órgano de administración dispondría de tres meses, desde el cierre del ejercicio del año 2021, para formular las cuentas anuales, y, acto seguido, serían entregadas las cuentas anuales formuladas a los auditores para su correspondiente gestión a fin de que, posteriormente, se convoque, por parte del órgano de administración, la junta general para la aprobación de las mismas. Las cuestiones a plantear serían:

- ¿Qué ocurre con estos plazos en relación con la normativa de emergencia?
- Y, consecuentemente, ¿Cómo afectaría esto en los casos en que se tuviera que verificar un hipotético desequilibrio patrimonial?



Pues bien, las entidades que, con anterioridad al estado de alarma, ya hubieran finalizado el plazo de formulación de cuentas anuales, no les resultará de aplicación los apartados 3 y 5 del art. 40 del RDL 8/2020 (acerca de la formulación y aprobación de cuentas anuales), y si será aplicable lo dispuesto en el apartado 4 para la auditoría de cuentas (prórroga de dos meses del plazo de emisión del informe). En este tipo de casos, deberá tenerse en cuenta que en el supuesto de utilizar dicha prórroga de dos meses en la realización de la auditoría y en la emisión del informe por parte del auditor, podría verse perjudicado el plazo de aprobación de las cuentas anuales, pues, sin tal informe, no sería posible aprobar en junta general las cuentas anuales, y resultaría imposible dar cumplimiento al plazo de aprobación establecido por ley. En definitiva, el plazo de seis meses para aprobar cuentas anuales podría verse afectado a raíz de la aplicación de la prórroga del trabajo de auditoría regulado en el art. 40.4 del RDL 8/2020.

Para las compañías que a fecha 14 de marzo de 2020 no habían finalizado el plazo para formular cuentas anuales, pero que, sin embargo, el órgano de administración social ya se había encargado de tener ejecutada la referida tarea, el plazo de formulación de las cuentas finalizaría en los tres meses siguiente a la finalización del estado de alarma (*ex art. 40.3 RDL 8/2020*), pudiendo ir tres meses más tarde el plazo para la aprobación de las cuentas anuales, en virtud del art. 40.5 RDL 8/2020. En este caso, también sería aplicable lo recogido por el art. 40.4 RDL 8/2020, es decir, la prórroga del plazo de auditoría.

En aquellas entidades cuyos administradores, a pesar de que pudieran adoptar la extensión del plazo de formulación de las cuentas anuales de su sociedad (*ex art. 40.3 RDL 8/2020*), formulan las cuentas anuales durante el estado de alarma, resultará de aplicación el apartado 4 del articulado al que venimos haciendo referencia, en relación con la prórroga del plazo para emitir el informe de auditoría, y también se aplicaría lo

regulado por el apartado 5, sobre la extensión del plazo de aprobación de las cuentas anuales.

En los casos en que las entidades mercantiles formulen las cuentas anuales dentro del periodo de extensión de tres meses a partir de la finalización del estado de alarma, se tendrá en cuenta que el período máximo para formular finalizaría a los tres meses, y el de aprobación por la junta general en el plazo de otros tres meses, resultando aplicable lo recogido en los apartados 3 y 5 del art. 40 del RDL 8/2020, y no siendo así en relación con el apartado 4, prórroga del plazo para realizar auditoría.

Las sociedades no sujetas a la obligación de auditar sus cuentas anuales, pero que, a pesar de ello, y de forma voluntaria, se someten a la misma, le resultará de aplicación lo dispuesto en el art. 40 del texto legal que estamos tratando.

A modo de resumen, y recopilando lo anteriormente expuesto, se podrían exponer las siguientes consideraciones:

1. El artículo 40.3 del RDL suspende el plazo de formulación de cuentas anuales legalmente establecido por el art. 253 TRLSC (tres meses desde el final del ejercicio), reanudándose en el momento en que finalice el estado de alarma. Se prorroga durante tres meses a partir de esta fecha, exclusivamente para las sociedades que, en el momento de inicio del estado de alarma, no hubieren formulado sus cuentas anuales, y no se hubiere agotado el plazo para formularlas. El articulado en cuestión no afectaría a aquellas entidades que hubiesen finalizado el plazo de formulación de cuentas antes del 14 de marzo de 2020.
2. El art. 40.3 RDL 8/2020 no rechaza que durante el estado de alarma puedan formularse y verificarse las cuentas anuales.

3. El art. 40.5 RDL 8/2020 altera el procedimiento de aprobar las cuentas anuales en junta general (regulado en los arts. 164 y 272 LSC), la junta general deberá reunirse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de finalización del plazo para formular las cuentas fijado en el art. 40.3 RDL 8/2020, esto es, puesto que el plazo para la formulación de las cuentas se prorroga por tres meses, el plazo de aprobación se verá consecuentemente prorrogado por otro período de tres meses. Dicho nuevo plazo sería igualmente aplicable a aquellas compañías cuyo plazo de formulación no había finalizado en la fecha de declaración del estado de alarma, pero que, sin embargo, ya habían formulado sus cuentas anuales en dicha fecha.
4. El art. 40.4 RDL 8/2020 regula un régimen especial en relación al plazo para realizar la auditoría de cuentas en los casos que, previo a la declaración del estado de alarma, o durante el transcurso del mismo, se hubiesen formulado las cuentas anuales.

Aunque la normativa que regula esta materia no establezca un plazo concreto para la realización de auditar las cuentas anuales, éstas deberán estar sujetas a lo pactado en contrato, además de permitir que se cumpla con los requerimientos legales y estatutarios exigidos a la entidad auditada a este respecto. Aparte de lo anterior, en relación con esta última circunstancia, debe tenerse en cuenta que los requerimientos legales en cuanto al cumplimiento de las obligaciones societarias de aprobación de cuentas en la junta general y su respectivo depósito en el Registro Mercantil se han alterado por el RDL al que venimos referenciándonos, lo cual pudiera afectar a la fecha de entrega del informe de auditoría.

A colación de lo anterior, las auditorías no sólo sirven para determinar si la contabilidad o la situación financiera que presenta la compañía en sus libros es correcta, sino que también tiene como objetivo evaluar la actuación de los administradores de la

sociedad y, protegiendo a la misma de las malas actuaciones de sus administradores, además de proteger a los acreedores de la sociedad. De este modo, los supuestos que darían lugar a una declaración culpable del administrador se podrían resumir en:

1. Incumplimiento en la obligación de llevar la contabilidad correctamente
2. Realizar irregularidades que impidan conocer la situación patrimonial o financiera real de la sociedad
3. Hacer un alzamiento total o parcial de los bienes de la sociedad, en perjuicio de los acreedores o de la propia empresa
4. Con anterioridad a la declaración de un concurso de acreedores, si el administrador hubiese hecho alguna operación societaria tendente a perjudicar a los posibles acreedores.

Por otro lado, cuestión aparte, debemos preguntarnos si tiene sentido que los administradores que formularon las cuentas anuales de 2019 antes de que se declarase el estado de alarma puedan estar más expuestos, desde el prisma de la responsabilidad por deudas sociales, que aquellos que en ese momento no habían formulado las mismas. La respuesta, a mi juicio, es que carece de sentido. La norma debe analizarse de acuerdo con su objeto y finalidad, es decir, ayudar a la sociedad y a los administradores ante esta situación de crisis sanitaria, por lo que cabe entender que no podría exigirse responsabilidad a los administradores por las deudas contraídas durante el estado de alarma, pues su responsabilidad está relacionada de forma directa con su eventual incumplimiento del deber de convocar la junta general, y ese deber quedó en suspenso, como ya hemos analizado durante el trabajo, en virtud de la normativa de emergencia. En todo caso, convendría que los preceptos que regulan esta situación se aclarasen, además, convendría de igual modo que se hubiera planteado una posible extensión de la

suspensión del plazo para convocar junta general, ya que es más que probable que la situación patrimonial de las entidades mercantiles siga siendo muy difícil en los meses posteriores al fin del estado de alarma.

En lo que se refiere a la disolución por causa legal o estatutaria precedente al estado de alarma, la norma establece que, antes y durante el estado de alarma, cuando concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria de la junta general por el órgano de administración social quedará suspendido. En mi opinión, se trata, en realidad, de una norma de responsabilidad de los administradores, pues sobre ellos recae el deber de instar la disolución (o el concurso de acreedores), o remover dicha causa, teniendo para ello un plazo de dos meses. Como ya se ha expuesto en el presente trabajo, si la causa de disolución hubiere concurrido con anterioridad al estado de alarma, para los casos en que no se hubiese superado aún, los plazos para convocar junta general se interrumpirían con la declaración del estado de alarma y se reanudarían una vez alzado dicho estado de alarma; en cambio, si se tratara de una causa de disolución acaecida durante el referido estado, directamente el cómputo del plazo no empezaría hasta el fin del estado de alarma. Durante dicho estado, la norma de emergencia deja claro que los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese período.

Dicho precepto (art. 40.12 RDL 8/2020), no está exento de dudas sobre su correcta interpretación. La interpretación literal conllevaría abrir un período de impunidad por deudas, en relación con las contraídas durante el estado de alarma; no obstante, la jurisprudencia relativa al art. 367 LSC (responsabilidad solidaria de los administradores en relación con las causas de disolución) lo dibuja como determinante de una responsabilidad objetiva por deudas que actúa como incentivo para el órgano de administración social a efectos de detectar los estados contables que conllevarían a la

disolución de la sociedad en cuestión, y que, consecuentemente, supondrían desequilibrios graves en su patrimonio. Esta interpretación resulta sin duda útil para contribuir a la financiación de las sociedades, pero esta finalidad, iría más allá del deber de diligencia de los administradores. Y es aquí donde, considero, no debería ser así, ya que la normativa de emergencia no debería alterar las bases de diligencia de un administrador societario, como figura de agente diligente y leal de la entidad mercantil.

El objetivo de lo regulado por este art. 367 LSC no tiene porqué caer por razones sanitarias o económicas, ya que, en ausencia del art. 40.12 RDL 8/2020, la obligación por parte del órgano de administración no se hubiere “suspendido” por estar incursos en un estado de alarma, por lo que el deber de diligencia de un administrador debe estar presente siempre y bajo cualquier circunstancia.

Cabría continuar introduciendo una cuestión fundamental como sería la de los casos en los que los administradores, actuando en contra de su deber de diligencia, seguirían incrementando las deudas de la sociedad. Y es que, a pesar de estar suspensa, como ya se ha expuesto, la obligación de convocar junta general para disolver, remover o declarar concurso de acreedores, por parte del órgano de administración, cuestión distinta sería que dicho órgano, amparado en la normativa de emergencia, faltara a sus obligaciones y deberes con respecto a la diligencia en la gestión o administración de la sociedad, en el sentido de que, si no intentaran, al menos, remediar tal situación de gravedad patrimonial, acentuando cada vez más dicho estado de endeudamiento, estarían consecuentemente faltando a su deber de no realizar los actos necesarios o convenientes para el interés social, por lo que podría promoverse, si se dieran los presupuestos para ello, acción de responsabilidad individual por incumplimiento del deber de diligencia. En definitiva, todo órgano de administración debe tener muy claro que, aun quedando en suspenso lo recogido por las normas de emergencia, en relación

con las causa de disolución, no exime, en absoluto, para que continúen ejerciendo su deber de diligencia, y en este caso, la forma correcta para acatar esa obligación, sería intentar paliar, en la medida de lo posible, aquella situación de endeudamiento por la que estaría atravesando la sociedad, es decir, la suspensión de la causa de disolución no excluye, bajo ningún concepto, el deber de diligencia de un ordenado empresario y deber de lealtad, a los que siempre se verá obligado.

Por último, en lo relativo a la suspensión, hasta el 31 de diciembre de 2021, de la obligación por parte del órgano de administración de declarar el concurso de acreedores ha favorecido la posible viabilidad de las empresas, dando un margen de maniobra para intentar remontar, evitando que se vean abocadas de forma inmediata a la declaración del concurso o a la disolución. Sin embargo, a ojos de quien elabora el presente trabajo, se trata de una postergación del cumplimiento de las obligaciones del deudor que con bastante probabilidad pueda llegar a agravar su insolvencia. En relación con ello, el Banco de España advierte que "la moratoria concursal provocará mayor número de empresas zombies", pues dos meses no ayudarán a salvar las empresas que se encuentran en inminente quiebra. Por lo que será cuestión de tiempo ver los efectos reales de esta medida, y si ha sido acertada o no la moratoria concedida para solicitar concurso de acreedores.

## **VII. CONCLUSIONES**

A modo de conclusiones, por un lado, podríamos resumir de forma general aquellas modificaciones normativas que entraron en vigor fruto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las cuales han supuesto, desde el punto de vista de la responsabilidad del órgano de administración, diferentes novedades en relación con la normativa ordinaria que regula la Ley de Sociedades de Capital.

De este modo, con la introducción del art. 40.11 del RDL 8/2020 se dispone que en los casos que concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria, por el órgano de administración, de la junta general de socios para la adopción del acuerdo de disolución de la misma (o los acuerdos para enervar la causa), quedan suspendidos durante el período del estado de alarma.

En este sentido, el art. 40.12 del RDL 18/2020 establece que, si dicha causa legal o estatutaria de disolución hubiese acaecido durante la vigencia del estado de alarma, el órgano de administración no respondería de las deudas sociales contraídas en dicho período.

Asimismo, y a los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas, el art. 18 del RDL 16/2020 (derogado por su convalidación parlamentaria por la Ley 3/2020) dispone que no se tendrán en consideración las pérdidas del ejercicio del año 2020.

En los casos en que en el ejercicio del año 2021 se apreciaran pérdidas suficientes como para dejar reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, el órgano de administración deberá convocar en el plazo de dos meses a contar desde la fecha del cierre del ejercicio la celebración de la junta para



proceder a disolver la sociedad, salvo en los casos en que se aumente o reduzca el capital social en cuantía suficiente.

Además, el art. 6.1 de la Ley 3/2020 exime al deudor (persona jurídica) del deber de solicitar el concurso de acreedores hasta el 14 de marzo de 2021.

Por otro lado, y a pesar de la entrada en vigor de toda esta normativa de emergencia, la cual pretende paliar los efectos causados por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, desde el punto de vista de la responsabilidad de los administradores sociales en relación con sus deberes legales y estatutarios, han surgido problemas interpretativos y casos no regulados (expuestos en el apartado anterior) que en la práctica harán compleja la interpretación de dichas normas.

Y es que, conviene reflexionar acerca de las referidas suspensiones en relación con el deber y responsabilidad del órgano de administración, pues, aun con la suspensión de ciertos deberes, como serían, por ejemplo, el deber de convocatoria de junta general de socios en el plazo de dos meses para disolver o enervar la disolución, o el deber de solicitar concurso de acreedores, los deberes de diligencia y lealtad (*ex arts. 225 y ss. LSC*) continúan vigentes, funcionando en paralelo a la normativa de emergencia, es decir, a pesar de la entrada en vigor de las normas de emergencia mencionadas anteriormente, entre otras, el órgano de administración siempre debe tener dar cumplimiento a sus deberes inherentes y que por excelencia tiene cualquier administrador social (diligencia y lealtad).

En base a lo anterior, para los casos en que el administrador no actuara diligentemente y desempeñando su cargo con la lealtad de un fiel representante, el mismo no podría ampararse en las normas de emergencia para eximir su responsabilidad, incurriendo en la falta de cumplimiento de sus deberes y debiendo

responder por ello. Por lo expuesto, podríamos llegar a la conclusión de que estos mecanismos introducidos a consecuencia de la crisis sanitaria han creado cierta inestabilidad e inseguridad en tal sentido, por lo que será conveniente que los administradores extremen la debida diligencia y actuen conforme a ella, ya que, ante este panorama de “vacío regulatorio”, podrían verse incursos en procedimientos de exigencia de responsabilidad por incumplimiento de su deber de responsabilidad ejercitada por algún socio o acreedor.

La proactividad de las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones y la diligencia de sus órganos de administración serán determinantes para hacer frente a la situación a la que deberán enfrentarse. La mayoría de las modificaciones introducidas por el Gobierno son temporales y se eliminarán cuando la situación se estabilice (careciendo de sentido la idea de que algunas de estas medidas flexibilizadoras puedan introducirse de forma permanente en la Ley de Sociedades de Capital); no obstante, el órgano de administración debe ser consciente de que la situación que se ha vivido durante este tiempo de pandemia dará lugar a cambios en las formas de operar de las compañías, y éste deberá llevar a cabo la supervisión y el cumplimiento de todos sus deberes inherentes al cargo, a fin de evitar que el número de entidades denominadas “zombies” a la espera de concurso o liquidación se incremente

## **VIII. BIBLIOGRAFÍA, LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA.**

### **Bibliografía**

BARBER MARRERO, L.A. y BETANCOR ÁLAMO, A.L. (2021) La moratoria concursal no supone "per se" una "patente de corso" para la responsabilidad de los administradores. El Derecho (Lefebvre).

CERRATO Crespán, I. (2015) El deber de diligencia de los administradores y la protección de la discrecionalidad empresarial.

DORIA TÖLLE, C. (2020) Disolución por pérdidas en tiempos de coronavirus. El Derecho (Lefebvre).

FACHAL NOGUER, N. (2018) El régimen de responsabilidad del órgano de administración plural. Tribuna Lefebvre.

GARCÍA-VILLARRUBIA, M. (2021) Legislación de emergencia y disolución por pérdidas: la responsabilidad de los administradores sociales y el estado de alarma. El Derecho. Revista de Derecho Mercantil, n.º 92.

ORELLANA CANO, N.A.; CAMPUZANO/SANJUÁN (Coords.) (2017) El órgano de administración. Guía de Sociedades de capital. Sepín, pág. 288.

PEINADO GARCÍA, J.I. (2020) Derecho de sociedades no analógico (Reflexiones sobre las medidas de excepción en materia de sociedades mercantiles). Diario La Ley, n.º 69. Editorial Wolters Kluwer, p. 24.

QUIJANO GONZÁLEZ, J. (2021) Los órganos societarios y el Estado de Alarma. Diario La Ley, n.º 9675, Sección Tribuna, Wolters Kluwer, p.15.

RODRÍGUEZ MASEDA, J.C. (2020) Año 2020: sin disolución por pérdidas. Revista E-Dictum, n.º 100, p. 2.

### **Webgrafía**

GARCÍA VALDECASAS BUTRÓN, J.A. (2020) Fecha de la causa de disolución por pérdidas. Informe Mercantil de Abril 2020. Recuperado de [www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-abril-de-2020-disolucion-por-perdidas-y-covid-19-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza/#fecha-de-la-disolucion-por-perdidas-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza-a-estos-efectos-covid-19](http://www.notariosyregistradores.com/web/secciones/oficina-mercantil/informes-mensuales-o-m/informe-abril-de-2020-disolucion-por-perdidas-y-covid-19-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza/#fecha-de-la-disolucion-por-perdidas-responsabilidad-de-los-administradores-fecha-de-la-fianza-a-estos-efectos-covid-19)

VETTORAZZI, L. (2020) Responsabilidad de las administraciones en tiempos del Covid-19. Recuperado de [www.expansion.com/juridico/opinion/2020/06/24/5ef243e5e5fdea43258b45cb.html](http://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/06/24/5ef243e5e5fdea43258b45cb.html)

### **Legislación**

Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia

### **Jurisprudencia**

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 670/2010, de 4 de noviembre de 2010

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 253/2016, de 18 de abril de 2016

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 472/2016, de 13 de julio de 2016

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 129/2017, de 27 de febrero de 2017

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 150/2017, de 2 de marzo de 2017

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 574/2017, de 24 de octubre de 2017

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 575/2017, de 24 de octubre de 2017

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 221/2018, de 16 de abril de 2018

Sentencia del Tribunal Supremo n.º 87/2019, de 13 de febrero de 2019

Sentencia de la Audiencia Provincial de León (Sección 1.ª) n.º 245/2020, de 16 de abril de 2020

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) n.º 983/2020, de 29 de mayo de 2020

## **IX. ANEXOS**

### **ANEXO I**

#### COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

#### **COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y DE EXPLOTACIÓN DE TRABAJOS Y DATOS DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER**

Por el presente documento, yo José Manuel Alcayde Natera, con DNI 30.262.821-L, mayor de edad y consciente de la responsabilidad que asumo, ME COMPROMETO A:

- 1) Respetar la confidencialidad de todos los datos que por cualquier medio (escritos, recogidos, registrados mediante medios electrónicos o informáticos, presenciados o relatados) lleguen a mi conocimiento durante la realización de mi Trabajo Fin de Máster (en adelante TFM), no desvelando ni reproduciendo en modo alguno dichos datos fuera del grupo de investigación correspondiente. Asumo que los datos anteriormente citados pueden referirse tanto a los observados por mí o relatados por cualquier otro investigador del equipo.
- 2) No hacer uso o explotación de los trabajos realizados, así como los protocolos desarrollados para el análisis de los mismos, más allá de lo estrictamente necesario para el desarrollo de mi labor y siempre contando con la autorización de mi tutor/a de TFM, cuyo nombre aparece al final de este documento. Cualquier otro posible uso del trabajo realizado deberá ser expresamente autorizado asimismo por el/la tutor/a responsable.
- 3) Seguir aquellas normativas legales y éticas que sean de aplicación para mi trabajo. Estas normativas han sido convenientemente expuestas por el/la tutor/a responsable y en el caso de que surja cualquier duda podrán ser consultadas con el Comité de Ética de la Universidad Loyola Andalucía.

SI

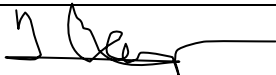


NO



Como prueba de las responsabilidades que asumo, firmo el presente documento en presencia del/ de la tutor/a del TFM.

En Sevilla, a 23 de junio de 2021.

<b>Fdo:</b> 	<b>Fdo:</b> LUCEÑO OLIVA JOSE LUIS - 28612722D
Nombre del /de la estudiante: José Manuel Alcayde Natera	Nombre del/ de la Tutor/a del TFM: José Luis Luceño Oliva

Firmado digitalmente por LUCEÑO OLIVA JOSE LUIS - 28612722D  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=+OCES-28612722D, givenName=JOSE LUIS, sn=LUCEÑO OLIVA, cn=LUCEÑO OLIVA JOSE LUIS - 28612722D  
Fecha: 2021.06.24 18:14:12 +02'00'

## ANEXO II

### AUTORIZACIÓN DE DEFENSA DE TFM



#### Autorización de defensa del Trabajo Fin de Máster

Centro	LOYOLA Leadership School
Titulación	Máster Universitario en
Curso Académico	2020-2021

Datos del alumno		
Apellidos: Alcayde Natera	Nombre: José Manuel	
DNI/Pasaporte: 30.262.821-L	Correo-e: jmalcaydenatera@al.uloysola.com	Teléfono: 606682533

Título del Trabajo Fin de Máster	
Título:	“Responsabilidad de los administradores sociales y normativa Covid-19”

Datos del director	
Apellidos: Luceño Oliva	Nombre: José Luis
Correo-e: jluceno@grupopuma.com	Teléfono: 607183531
Datos del co-director	
Apellidos: -	Nombre: -
Correo-e: -	Teléfono: -

El abajo firmante, en su calidad de director, revisado el “Trabajo Fin de Máster” considera que éste está listo para su presentación, y por la presente **AUTORIZA** a el/la alumno/a arriba citado para realizar la presentación y defensa que será realizada en <indicar idioma>.

Al mismo tiempo solicita que se convoque el acto de defensa y evaluación de dicho Trabajo, para que el mismo pueda tener los efectos académicos correspondientes.

En Sevilla, a 23 de junio de 2021.

LUCENO OLIVA  
JOSE LUIS -  
28612722D

Firmado digitalmente por LUCENO OLIVA JOSE LUIS - 28612722D  
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES, serialNumber=IDCES-28612722D, givenName=JOSE LUIS, sn=LUCENO OLIVA, cn=LUCENO OLIVA JOSE LUIS - 28612722D  
Fecha: 2021.06.24 18:16:24 +02'00'

Fdo: José Luis Luceño Oliva





## CONTRATO DE FORMACIÓN RENOVACIÓN

### A. PARTES Y OBJETO: ASIGNATURAS

Por el presente documento don JOSE MANUEL ALCAYDE NATERA, con NIF 30262821L, se matricula en la/s asignatura/s que a continuación se relacionan correspondientes al Máster Universitario en Asesoría Jurídica de Empresas impartido por la Universidad Loyola:

Curso	Asignatura	Créditos	Carácter	Modalidad	Grupo
2020/21	Técnicas de Gestión de Despachos, Habilidades Profesionales y Ética Profesional	3	OB	D	-
2020/21	Prácticas Externas	12	PR	D	-
2020/21	Trabajo Fin de Máster	6	FM	O	A

FB: Formación Básica. OB: Obligatoria. OP: Optativa. PR: Prácticas externas. FM: Trabajo Fin de Máster. CO: Complementos de formación. NO: No aplica.

C: Reconocimiento externo CFGS. D: Reconocimiento PCEO. E: Reconocimiento externo. I: Reconocimiento interno. O: Matrícula Ordinaria. P: PMI.

### B. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN

El/La estudiante abajo firmante ha leído y acepta que:

1. Los datos e información que aporta son veraces y completos, sin que haya omitido datos relevantes o que deban ser tenidos en cuenta por la Universidad. La Universidad, en virtud de la normativa académica, comprobará la veracidad de la información y de la documentación aportada para el acceso y/o la continuación de los estudios universitarios, pudiendo ejercer las acciones que estime convenientes en caso de que estas no sean veraces.
2. En caso de no acreditar, mediante la aportación de la documentación correspondiente, que cumple los requisitos para acceder a la universidad española, se me dará de baja de oficio, según el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.
3. Queda vinculada por el presente contrato con la Universidad Loyola para la realización de los estudios en los que fue admitida, y se compromete a cumplir y respetar la normativa de convivencia y académica vigente que le sea de aplicación. Las normas de organización, funcionamiento y convivencia en el centro están contenidas en las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad (Decreto 82/2013, de 16 de julio, BOJA 139 de 18 de julio), en la Normativa Académica General y en sus normas de desarrollo, que son públicas y que todos los miembros de la comunidad universitaria tienen el derecho y la obligación de conocer y respetar, quedando vinculado por la firma de este contrato a su cumplimiento. En caso de incumplimiento, la Universidad adoptará las medidas legales oportunas.

4. Durante el curso, la actividad docente y su evaluación se realizarán en los campus. En caso de producirse circunstancias excepcionales que dificulten o imposibiliten la presencia de estudiantes y profesores en los campus de la Universidad en virtud de una normativa de la autoridad competente, se podrá realizar la actividad docente de manera virtual síncrona, mediante la conexión por tecnologías de la información y comunicación que establezca la Universidad. Esta situación incluye las técnicas de evaluación que permitan la supervisión de la realización de las distintas pruebas, todo ello con la finalidad de procurar la veraz adquisición de las competencias ligadas a los títulos oficiales por parte de los estudiantes, tal y como se ha comunicado a la Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA). Esta agencia, además de verificar todos los títulos oficiales de la Universidad Loyola, ha certificado la implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad de los centros, lo que constituye un plus de confianza en el aseguramiento de la calidad institucional de su gestión académica.
5. Se compromete a abonar los precios establecidos por la Universidad en el presente curso académico. La anulación posterior de la matrícula no confiere derecho a la devolución del precio abonado, salvo en los casos contemplados en la Normativa Académica General de la Universidad. La modificación de matrícula que, aun siendo autorizada, se realice fuera de los plazos establecidos, conllevará un recargo del 10 % en el precio de matrícula.
6. Para poder matricular el Trabajo Fin de Estudios (Grado o Máster), es necesario acreditar previamente un nivel de inglés B2 o superior (acreditación de Cambridge, Trinity, TOEFL, IELTS, EOI, Linguaskill).
7. La Universidad se reserva el derecho a decidir la no impartición de una asignatura, curso o programa si el número de matriculados no alcanza el mínimo del 30 % de las plazas del curso o programa. En ese caso, se reintegrará íntegramente el precio abonado en concepto de matrícula.

## C. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Información en virtud del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos):

- Los datos e información que aporta son veraces y completos, sin que haya omitido datos relevantes o que deban de ser tenidos en cuenta por la Universidad. La Universidad, en virtud de la normativa académica, comprobará la veracidad de la información y de la documentación aportada para el acceso y/o la continuación de los estudios universitarios, pudiendo ejercer las acciones que estime conveniente en caso de no sean veraces.
- **Finalidad:** las finalidades determinadas en la cláusula de protección de datos insertada en el formulario de matrícula en los términos exigidos en el Reglamento General de Protección y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- **Legitimación:** basada en la formalización del documento de matriculación y consentimientos prestados para las finalidades adicionales.
- **Destinatarios:** no existe previsión de cesiones de datos personales a terceras empresas sin consentimiento expreso de los titulares de los datos. Pueden existir transferencias internacionales de datos (movilidad de alumnos entre universidades).
- **Derechos:** usted podrá retirar los consentimientos que hubiera prestado y ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento dirigiendo su solicitud a nuestro delegado de protección de datos. Por correo ordinario a Universidad Loyola, calle Escritor Castilla Aguayo, 4 - 14004 – Córdoba o a Avda. de las Universidades s/n - 41704 - Dos Hermanas, Sevilla. Por correo electrónico a la dirección [rgpd@uloyola.es](mailto:rgpd@uloyola.es).

Información adicional de protección de datos: <https://www.uloyola.es/proteccion-de-datos>

ALCAYDE NATERA, JOSE MANUEL  
NIF: 30262821L

Matrícula realizada el 27/07/2020 a las 12:59:00 horas

..... *Fin del documento* .....